

FRAUDE EN EL PATRIMONIO REAL DE FELIPE II: LA ACTUACIÓN DE LOS GOBERNADORES FILIPINOS LABEZARIS Y RONQUILLO DE PEÑALOSA COMO EJEMPLO DE CORRUPCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS IMPERIALES

Patricio Hidalgo Nuchera
(Universidad Autónoma de Madrid)

En este año de 1998 celebramos dos aniversarios: el de Felipe II y el de la pérdida de Filipinas, unas Filipinas que fueron ganadas precisamente por Felipe II, a quienes deben su nombre. Y las ganó de una forma fraudulenta: violando el tratado de Zaragoza que su padre, el emperador Carlos V, firmó en 1529, por el cual cedía las Molucas y todo lo situado 17° al Este a Portugal por 350.000 ducados. Pero el descubrimiento de minas de plata en América en la década de 1540 abrió la posibilidad de un fabuloso negocio con Asia en base al diferente valor de la plata en ambos lados del Pacífico: el negocio estaba en que, en Asia, la plata era escasa y, por tanto, más cara que en Europa, lo que permitía comprar los productos asiáticos a un precio muy bajo y venderlos luego en Europa con un inmenso margen de beneficio. Pero para realizar este negocio, Felipe II necesitaba una base cercana al imperio chino, base que va a ser Filipinas: la primera tentativa por establecerse allí fue la expedición de Ruy López de Villalobos en 1542, pero no logró regresar; quien sí lo consiguió fue Legazpi en 1565. Pero éste no es el tema que nos trae aquí -ya tratado por mí mismo en mi libro *Los primeros de Filipinas. Crónicas de la conquista del archipiélago de San Lázaro*. Madrid: Miraguano y Polifemo, 1995. 367 p. (Biblioteca de Viajeros Hispánicos; 14)-, sino el del fraude como corrupción de los funcionarios públicos.

Mi interés por este tema parte de la biografía que realicé de Antonio de Morga, un burócrata destinado, primero, en Manila y posteriormente en México y Quito⁽¹⁾. Un trabajo de Pietschmann de 1982 sobre burocracia y corrupción en la Hispanoamérica colonial dejaba sentado que la corrupción de los funcionarios no era algo ocasional ligado a factores sociales o económicos sino algo inherente al sistema imperial español. Diversas circunstancias -unas independientes del Estado, pero otras ligadas directamente a su actuación- facilitaron el que la corrupción se convirtiera desde el siglo XVII, no en un abuso más o menos frecuente sino en la norma⁽²⁾.

Entre las primeras Pietschmann cita el hecho de que a América y Filipinas sólo iban aquéllos que pretendían mejorar su suerte y no encontraban el modo de hacerlo en la

Península. Una vez allí, muchos burócratas acudían a mecanismos ilícitos de enriquecimiento y ascenso social, ya que sus sueldos no les permitían llevar el tren de vida necesario que merecía el cargo que ocupaban; y no es que su sueldo fuese bajo, sino más bien que necesitaban mayores ingresos para imitar el estilo de vida de las élites criollas.

Más importante fue la corrupción derivada de la venta de oficios, en la cual fue cómplice la Corona, ya que convirtió los oficios en una inversión de tipo comercial, puesto que quienes los compraban o beneficiaban querían recuperar la inversión realizada. Pero aunque el cargo se obtuviera por una vía regular, los costes del despacho burocrático y del viaje así como las fianzas a depositar hacían que, con el simple sueldo, no se reembolsasen las cantidades pagadas. Era inevitable, por tanto, recurrir a prácticas ilegales para recompensar los gastos realizados.

Hay consenso en atribuir a la corrupción una función política importante, ya que facilitó el equilibrio de intereses entre la metrópoli y las sociedades coloniales. En unas reflexiones históricas sobre la corrupción, Fontana hablaba de lo falaz que resulta pensar que las monarquías absolutas lograron crear una administración centralizada, ya que carecían de los instrumentos necesarios para llevar a cabo la tarea⁽³⁾. Eso implicó, por una parte, dejar una considerable libertad de actuación a los diferentes burócratas y, por otra, apoyarse en los poderes locales. Ciertamente que tanto esto como la venta de oficios suponía una cesión de poder, pero tenía la ventaja de crear una sólida capa de intereses en torno a la monarquía. Según Fontana, esto no debe atribuirse a la corrupción, sino a la falta de un aparato administrativo adecuado y a necesidades financieras acuciantes⁽⁴⁾.

En este trabajo quisiera ejemplificar el espíritu de explotación de los funcionarios imperiales enviados a las Filipinas en tiempos de Felipe II en la conducta de dos de sus gobernadores, Guido de Labezaris y Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, quienes en lugar de velar por los fondos públicos, los defraudaron en beneficio propio y de sus allegados. Sus actuaciones son un claro ejemplo del proceder del típico funcionario imperial que pinta Pietschmann: sin posibilidad de instalarse en la metrópoli y deseoso de ascenso social, marcha a un país de conquista donde da rienda suelta a su espíritu de rapacidad.

Para mi relato, voy a fijar la atención en tres puntos sucesivos: el expolio de los pueblos incorporados al patrimonio real y que servían para hacer frente a las necesidades de la Hacienda; el saqueo de ésta por parte del gobernador interino Guido de Labezaris; y el pleito por la incorporación a la Corona de la jugosa encomienda de Bitis y Lubao, en el cual el entonces gobernador Gonzalo Roquillo hizo todo lo posible para defraudar el patrimonio real.

1. LOS PUEBLOS DE LA REAL CORONA

Con el fin de proporcionar ingresos a las arcas reales existían en Filipinas, desde el primer repartimiento de Legazpi, encomiendas adscritas a la Corona. Recordemos que, en uno de los despachos que Juan de la Isla llevó a la isla de Panay, se ordenaba al Adelantado que asignase al patrimonio real las cabeceras, puertos de mar y lugares poblados de españoles⁽⁵⁾. En acatamiento de tal mandato, Miguel López puso en él los siguientes pueblos:

- Con fecha de 16 de enero de 1571⁽⁶⁾: en Cebú, el puerto y pueblos de Cebú hasta Caripata; en Panay, el río y población de Panay, desde el mar hasta Calitlan; en Mindanao, el río principal, punta de Cavit, puerto de la Caldera, Zamboanga y "todos los pueblos donde se cría y coje canela"; en Luzón, Manila, Cavite y poblaciones intermedias; y en Mindoro, su puerto y pueblo.
- Con fecha de 16 de mayo de 1572⁽⁷⁾: en Luzón, el pueblo de Castilla -"para que otro que SM. no fuese señor de pueblo que semejante nombre tenga"-, Cabache y Cabuyas, Uban y Balilan en la bahía de Ybalon.

Aunque si comparamos el número de pueblos incorporados a la Corona con los encomendados en particulares la balanza se inclina por éstos últimos, no es despreciable la cifra de los primeros. Aun así, era pequeña para hacer frente a las necesidades de la Hacienda filipina, por lo que ésta sufrirá un déficit crónico. En efecto, si consideramos que para financiar los astilleros, pagar los salarios de los que trabajaban en ellos, subvenir a las limosnas de los religiosos y abonar, desde 1583, los salarios de la primera Audiencia no contaba la Caja sino con unos ocho mil pesos de renta en tributos de naturales puestos en la Corona y unos tres mil poco más o menos por los derechos del diezmo y quilataje del oro, nos damos cuenta que el número de pueblos adscritos a la Corona resulta insuficiente⁽⁸⁾.

Las causas de este hecho nos las explica el factor Juan Bautista Román. Para este Oficial Real, una de ellas estribaba en el haber seguido al pie de la letra la instrucción que disponía que todas las cabeceras de provincia y puertos de mar se pusiesen en la Corona, ya que en Filipinas no existía un régimen socio-político centralizado en grandes núcleos de población; de ahí que "de 170 mil habitantes poco más o menos que están encomendados no han cabido a Vuestra Magestad más de 7000 como a un particular encomendero..."⁽⁹⁾.

Otra de las causas que ofrece el factor Román es que las encomiendas que vacaban, en lugar de -como estaba dispuesto- incorporarse a la Corona, se volvían a encomendar; para ello, los gobernadores se basaban en "cierto capítulo de carta que dicen Vuestra Magestad escribió a Miguel López de Legazpi", por el cual se le permitía el poder reencomendar por ser entonces "la tierra nueva". Y, por supuesto, los españoles querían que este concepto siguiera teniendo entera vigencia: unos, los gobernadores, para "tener que dar a sus deudos y amigos"; otros, los que ya tenían encomiendas, para mejorarlas; y, por último, los que no poseían alguna, para alcanzarlas⁽¹⁰⁾.

Aunque en parte el funcionario llevaba razón, no hay que olvidar que Filipinas, pocos años después de su conquista, no era Nueva España, donde las encomiendas, al vacar por muerte de sus poseedores, se incorporaban a la Corona. En las Islas esto era impracticable, tanto porque no estaba pacificado todo el territorio como porque, según escribía Sande, "aquí mueren tantos hombres que en quatro años serían todas las encomiendas de Vuestra Magestad"⁽¹¹⁾.

De reencomendar las vacantes, además de mantener indirectamente el déficit de la Hacienda, se seguían otras perniciosas consecuencias: por un lado, se paralizaban las conquistas, ya que los soldados no cifraban en ellas sus esperanzas de obtener encomiendas, sino en la muerte de algún encomendero; por otro, esta situación daba lugar a

que los gobernadores las vendiesen "por vías indirectas", obteniéndolas de esta manera personas sin los méritos suficientes⁽¹²⁾. El propio factor Román proponía al rey como solución quitar a los gobernadores la facultad de encomendar o, en su defecto, mandarlos que, de todas las encomiendas que vacaran, pusiesen la tercia parte en la Corona hasta que la Hacienda pudiese hacer frente a sus gastos ordinarios⁽¹³⁾.

Ya antes de esta propuesta, los Oficiales Reales sugirieron al gobernador Sande que pusiese en la Corona algunos pueblos a fin de sufragar los gastos de la caja real. Se quejaban, y con razón, de que la principal encomienda del rey, la de Bitis y Lubao -en la provincia de Pampanga-, habíase devuelto por orden expresa de Felipe II al ex-gobernador Labezaris; solicitaban por ello a Sande que incorporase alguna otra, ya que las ordenanzas del Bosque de Segovia disponían que "demás de las cabeceras y puertos de mar, se han de reservar para la Corona los pueblos que fueren necesarios para pagar los salarios de los que han de gobernar la tierra y defenderla y administrar su hacienda"⁽¹⁴⁾.

Aunque el gobernador respondió que "tendría cuidado de acudir a las cosas que convengan al servicio de Su Magestad"⁽¹⁵⁾, parece ser que no lo tuvo. Ello motivó que los Oficiales Reales enviasen una copia de su citado testimonio al rey, solicitando en la carta que le acompañaba que se ordenase a Sande tener en la Caja treinta mil pesos de renta cada año, incorporando para ello alguna de las encomiendas que vacaran⁽¹⁶⁾.

Aparte de esta petición, los funcionarios reales de Filipinas nos especifican en su carta otra de las causas del déficit que padecía la Hacienda de las Islas. Esta vez no se trataba de la cantidad sino de la calidad de los repartimientos incorporados. Su "mala calidad" se infiere de la petición que hacen de que los que se adscriban a la Corona "sean de quien se pueda cobrar tributo y no indios serranos y los más lejanos, inquietos y pobres y de ningún provecho, como lo son los que han señalado para Vuestra Magestad los gobernadores pasados, que los más dellos no se habrán ni son de ninguna utilidad el día de hoy, de cuya causa se padece el trabajo y miseria que significamos". A los gobernadores, en definitiva, no les importaba en absoluto la calidad de los repartimientos reales, ya que "saben que han de ser preferidos para la paga de sus salarios, aunque el día de hoy a él y a nosotros se deben cantidad de dineros y no hay de qué sean pagados"⁽¹⁷⁾.

Para solucionar el déficit hacendístico, el nuevo gobernador Gonzalo Ronquillo impuso en 1580 el derecho de almojarifazgo, cuya cuantía era el 2% de las mercancías que se exportaban a Nueva España y el 3% de las que se importaban de China⁽¹⁸⁾.

No serían suficientes estos nuevos derechos, muy al contrario, debió aumentar el déficit cuando los Oficiales Reales solicitaron ese mismo año, no ya los treinta mil del anterior, sino cincuenta mil⁽¹⁹⁾; incluso en 1582 pedirán, en lugar de una cantidad determinada, tantos tributos como el gasto que tenía la Hacienda⁽²⁰⁾.

Pero la solución más eficaz y en la que insisten los Oficiales Reales para enjugar el déficit presupuestario consistía en la reincorporación de la encomienda de Bitis y Lubao a la Corona. De unos cinco mil tributarios y situada en la provincia productora de arroz por excelencia, la Pampanga, la tomó para sí Guido de Labezaris cuando era gobernador interino; su sucesor, Sande, se la quitó y la adscribió al patrimonio real para, poco después y por orden de Felipe II, tener que devolvérsela. Todos los intentos de los

ministros de la Real Hacienda para que Labezaris fuera despojado de ella o se la trocasen por otra⁽²¹⁾ resultaron infructuosos. Lo mismo solicitaron cuando, a su muerte, le sucedió su viuda, doña Inés de Gibraleón, pensando que por ser una mujer de más de 70 años le sería suficiente para su sustento con otra encomienda que poseía en Ilocos y Mindanao⁽²²⁾. Por si ello no fuese posible, propusieron al rey que se mandase al gobernador que, a la muerte de doña Inés, la encomienda se incorporase a la Corona⁽²³⁾. Esta petición, que no tendría razón de ser si se cumpliesen las leyes, la basaban los Oficiales en su creencia de que la máxima autoridad de las Islas la daría a algún particular antes que a la Corona, "como no ha puesto ningún indio de los que han vacado en su tiempo"⁽²⁴⁾. Pero sobre la problemática de la encomienda de Bitis y Lubao volveremos más adelante.⁽²⁵⁾

También el fiscal intentaba incorporar encomiendas vacas a la Hacienda, sobre todo con el objetivo de hacer frente a los doce mil pesos de renta que se habían señalado por RC 10 mayo 1583 para la paga de los salarios de la primera Audiencia. Pero todos estos esfuerzos se veían frenados por el gobernador Gonzalo Ronquillo, quien tomaba partido por los vecinos encomenderos; incluso desincorporó algunos repartimientos para concederlos a particulares, en cuyo caso tuvo el fiscal que defender los intereses reales. Vemos que era clara la intención del gobernador de indisponer a la población española en contra de este ministro, seguramente para que le sirviera de pantalla a críticas que de otra manera se dirigirían contra él. Así lo manifestaba el fiscal Ayala cuando, cada vez que tenía que pleitear por las encomiendas que recibían los particulares porque debían estar incorporadas a la Corona, el gobernador

"cumple con decir a los soldados que él ya les dio de comer y que yo se lo quito y que pues yo contradigo y hago revocar algunas encomiendas que él da, que él no es el gobernador sino yo"⁽²⁶⁾.

A más de estos despojos, a otros ardidess recurrían los gobernadores para poner trabas a la defensa del patrimonio real. Así sucedió cuando los Oficiales Reales nombraron al único abogado que había en la ciudad por defensor de la Hacienda; tal nombramiento fue boicoteado por el gobernador, quien le nombró protector de naturales, "y desta manera hacía por las partes contrarias"⁽²⁷⁾.

Ante el saqueo de su patrimonio, Felipe II solicitó informes al gobernador y audiencia de Filipinas sobre las encomiendas adscritas a su Corona y las que disfrutaban los particulares, especificando cuáles y cuántas se habían sacado de su propiedad y la razón de ello⁽²⁸⁾.

A más de estas circunstancias, otras de distinto signo coadyuvaban al déficit de la hacienda filipina. Unas se debían a la "mortalidad pasada", la cual había causado un descenso de la población tributaria en poder de la Corona⁽²⁹⁾; otras, a la "esterilidad de los tiempos", con sus secuelas de hambres y muertes⁽³⁰⁾; una tercera se cifraba en los malos tratamientos de los religiosos: un ejemplo de ello nos lo proporciona el gobernador Tello al referir que, de los doce mil tributos que solían cobrarse en Ilocos, en los últimos años se habían reducido a unos dos mil quinientos; para remediar la situación, envió un juez a que hiciese regresar a los huidos a las encomiendas del rey y ordenara al provincial de San Agustín a que pusiese freno a sus frailes en los malos tratos y trabajos abusivos que daban a los indios⁽³¹⁾.

Otro factor que contribuía al descubierto de la Hacienda consistía en el hecho de casi doblarse el número de soldados que debía tener la infantería de paga, cuatrocientos, mandada fundar en 1590⁽³²⁾. Por último, una causa más técnica del déficit presupuestario era debida a la tasación que hizo don Luis Pérez Dasmariñas en los años de 1594-95, ya que, según los Oficiales Reales, "debiéndola ampliar de lo que estaba, la acortó de manera a persuasión de religiosos", teniendo como consecuencia un descubierto de veinte mil pesos⁽³³⁾.

Recopilando, se podría decir que las causas del déficit de la Hacienda filipina serían la pequeña y mala cantidad de los repartimientos de la Corona; la no incorporación de nuevos repartimientos e, incluso, el sacarlos de ella; la mortalidad; los malos tratos, que propiciaban la huida; y unas tasas tributarias pequeñas. Como soluciones se proponía la incorporación de la importantísima encomienda de Bitis y Lubao o, en su defecto, de otras en cantidad suficiente como para hacer frente a las necesidades económicas más ordinarias; la imposición del almojarifazgo y la elevación de las tasas tributarias.

Por la insistencia de los Oficiales Reales en la incorporación de la encomienda de Bitis y Lubao y como espejo de la conducta de los gobernadores filipinos creemos apropiado tratar un poco por extenso la problemática de dicho repartimiento, así como el saqueo por parte de Guido de Labezaris del patrimonio real.

2. SAQUEO POR LABEZARIS DE LA HACIENDA REAL

La crítica del expolio de la Hacienda filipina por Guido de Labezaris costó la prisión al factor Andrés de Mirandaola. Parece ser que, mientras éste estuvo ausente de Manila durante los dos meses y medio que acompañó al maestro de campo Martín de Goyti en la pacificación de Ilocos, se cobraron 564 marcos y 6 ochavos de oro que ni se ingresaron en la Caja "de tres llaves" ni aparecían en los cargos del testimonio que dieron el gobernador y el contador. A su regreso, se dio cuenta de que faltaban de la Caja 263 marcos que había dejado en ella antes de partir. Al pedir cuentas de ellos como de los cobrados en su ausencia, tuvo diferencias con el contador Cauchela, a resultas de lo cual -y poniendo como excusa el no haberse quitado el sombrero ante el gobernador- Labezaris lo encarceló, procesó y mandó que se presentase ante la Audiencia de México. Desde esta ciudad, Mirandaola escribía a Felipe II culpando al gobernador y al contador de haberse apropiado de las cantidades señaladas, entendiéndolo por su procesamiento que "la mayor parte de todo estaba en poder del gobernador, y así lo embía a esta ciudad (México), y lo demás el contador"⁽³⁴⁾.

Con la carta, Mirandaola enviaba a España dos testimonios que probaban tanto la rapiña de la máxima autoridad como su indolencia ante el patrimonio real. El primero de ellos es una relación de los tributos cobrados desde el 21 de agosto de 1572 al 27 de junio de 1573 y no ingresados en la Caja Real aprovechando que él estaba ausente de Manila. Estos tributos fueron los siguientes⁽³⁵⁾:

- 4 taes de oro -"que cada tae tiene una onza y una ochava que tendrá el oro, que era 20 quilates"- y 4000 mantas y cierta cantidad de cera, cobrados por Juan de Pedraza y Juan Pérez de Ojeda de las provincias de Bitis y Lubao. Señala Mirandaola

- que todo, o la mayor parte de ello, lo envió el gobernador por bienes suyos a Gabriel Díaz, tesorero que fue de la ciudad de México, para que lo beneficiase;
- cierta cantidad de oro y mantas cobradas del río de Panay y del repartimiento de Fernando de Monroy y Pedro de Vargas;
 - los tributos cobrados en la isla de Cebú por Pedro Navarro, alcalde ordinario de la villa del Santísimo Nombre de Jesús;
 - 1100 pesos que cobró Labezaris de los bienes del Adelantado en una vajilla de plata para su servicio, los cuales eran patrimonio real;
 - 2000 pesos cobrados de los socorros que se dieron en el río de Panay de la ropa que envió el rey para la gente del campo con el capitán Juan de la Isla;
 - los tributos de los pueblos de Hernán López, que se cobraron y no se metieron en la Caja en depósito;
 - 1190 mantas y 66 taes de oro de Luzón de 5^{1/2} arrobas de algodón hilado, cobrados por Alonso de Soto de los tributos de los bajos de Tuley. Según Mirandaola, las mantas y cierta cantidad de oro fueron enviadas por Labezaris a México;
 - y los quintos reales del oro que se diezmó.

El segundo testimonio que el factor enviaba a España daba cuenta de cómo Labezaris no sólo no aumentaba el escaso patrimonio real sino, todo lo contrario, lo esquil-maba aún más⁽³⁶⁾. Según Mirandaola, los pueblos y rentas en cabeza del rey eran los siguientes:

- en la isla de Cebú: el pueblo de Cebú y Saripata. Al margen apostillaba: "Es tan poca cosa que, a lo que entiendo, no bale doscientos ducados";
- en la isla de Panay: el río de Panay y, con él, cierta cantidad de población. Anotaba: "Es poco";
- en la isla de Mindanao: el río del mismo nombre y la punta de Cabit, que es donde se coge la canela. Acota el factor: "Bindanao está por conquistar; de la punta de Cabit se ha resgatado la canela que se ha traydo a esta Nueva España";
- en la isla de Luzón: Manila y la costa hasta el puerto de Cavite, que está a dos leguas; y el pueblo que llaman Castilla. Glosa al margen: "Es poco".

Como deducimos de los comentarios de Mirandaola, la Hacienda real de Filipinas tenía muy pocos aprovechamientos. Por ello le parece un despropósito los actos del gobernador contra estas exiguas rentas. Entre ellos señala:

- los principales de Manila tenían, a unas dos leguas de la ciudad, unas sementeras donde varios poblezueros de esclavos y deudos suyos les recogían el arroz. Si bien él advirtió a Labezaris que estos poblezueros correspondían al rey por pertenecerle sus principales, el gobernador no hizo caso y los encomendó. Indirectamente, este acto perjudicó a la Hacienda, puesto que los principales de Manila se quedaron sin mano de obra, ya que los ahora encomendados no querían prestarles reconocimiento;
- el pueblo y cabecera de Bay, que Legazpi había dejado para los gastos y avituallamiento de los barcos que hacían la ruta Manila-Acapulco, Labezaris lo encomendó en Juan Pacheco Maldonado;

- igualmente, reencomendó algunos pueblos de la comarca de Manila que se cobraban para la Real Hacienda por fallecimiento de sus poseedores sin haber dejado herederos. Mirandaola opinaba que no se debían reencomendar los vacantes porque con ellos se podría hacer frente a las necesidades ordinarias, ya que de lo que tiene el rey "no ay cosa que el día de oy se pueda tener aprovechamiento".

Por esta situación, el factor exponía al monarca lo necesario que resultaba que las encomiendas de Bitis y Lubao se cobrasen por su cuenta, ya que "no tiene Vuestra Magestad de donde se pueda sacar una hanega de arroz si no es de allí"⁽³⁷⁾.

3. LA INCORPORACIÓN DE LA ENCOMIENDA DE BITIS Y LUBAO

El pleito por la incorporación al patrimonio real de esta encomienda, situada en la provincia de la Pampanga, nos parece paradigmático de los problemas que tuvieron que afrontar los Oficiales Reales para conseguir que la Hacienda de Filipinas contara con recursos propios y suficientes. El litigio tiene su origen en la autoconcesión que Guido de Labezaris se hizo cuando desempeñaba el cargo de gobernador interino⁽³⁸⁾, tomando para sí las encomiendas de Bitis y Lubao, Purao y Tagurín, ésta en Ilocos, y río de Butuán en Mindanao⁽³⁹⁾.

Si mientras estuvo en el gobierno las gozó sin problemas, estos aparecieron con el nuevo gobernador, Francisco de Sande, una de cuyas primeras medidas fue despojar a su antecesor de sus encomiendas por auto de 26 de septiembre de 1575⁽⁴⁰⁾. Como era de esperar, Labezaris no quedó inactivo y enseguida escribió al rey justificando haberse autoencomendado por la facultad que tenían los capitanes de tomar para sí un buen repartimiento en las provincias que pacificaran o descubrieran⁽⁴¹⁾. Y esto, decía, no lo había hecho por afán de lucro sino para poder hacer frente a necesidades propias y ajenas, ya que los dos mil ducados de su salario no eran suficientes⁽⁴²⁾.

Tuvo Felipe II en cuenta estos motivos cuando, por una cédula de 1577, ordenó a Sande que le fueran devueltos a su antiguo poseedor "los dichos repartimientos -tan sólo se señalan en la parte expositiva de la cédula los de la Pampanga e Ilocos, no así el de Mindanao- y todos los tributos que dellos les hubiereis hecho pagar, sin que se le quite nada entre tanto su residencia se ve..."⁽⁴³⁾.

Con la cédula en su poder, Labezaris la presenta y exige su cumplimiento al gobernador, a lo que éste accede⁽⁴⁴⁾. Ante el auto en que se obliga a los Oficiales Reales a devolver a su antiguo poseedor tanto las encomiendas como los frutos de ellas obtenidos⁽⁴⁵⁾, éstos impugnan la orden real únicamente en cuanto al repartimiento de Bitis y Lubao. Se infiere de ello que no había por parte de dichos funcionarios una animadversión en contra del ex-gobernador, sino sólo una actitud de defensa de la Hacienda determinada por el gran valor económico de la encomienda de la Pampanga. En efecto, parece ser que ésta era de suma importancia para la Corona debido a que el arroz que tributaba se repartía entre personas necesitadas, se daba como salario a los trabajadores del astillero y se proveían los navíos que hacían la carrera de Nueva España; aparte de dicho producto, se obtenían de ella las maderas para la construcción de barcos y su cercanía a Manila abarataba los costos del transporte. Todos estos argumentos, invocados por los Oficiales Reales ante el gobernador para que suspendiese el cumplimen-

to de la cédula, no fueron tenidos en cuenta, y un nuevo auto de Sande ratificaba el anterior, aunque permitiéndoles la apelación a la Corte⁽⁴⁶⁾.

Sólo cuatro días más tarde, los ministros de la Hacienda escribían a Felipe II dándole cuenta de las diligencias anteriores y repitiéndole los argumentos por los que la encomienda de Bitis y Lubao debería estar incorporada a su persona⁽⁴⁷⁾. Sin embargo, ninguna medida debió ser tomada en la Corte puesto que, cuando en 1580 falleció Labezaris, las encomiendas pasaron, al no tener hijos, a su viuda, doña Inés Álvarez de Gibraleón.

Este hecho fue aprovechado por los Oficiales Reales para intentar la incorporación de Bitis y Lubao, basándose para ello en dos argumentos⁽⁴⁸⁾: que la cédula de 1577 concedía las encomiendas a Labezaris "entre tanto su residencia se ve...", lo cual significa que no se le dieron por "ley de sucesión" sino exclusivamente a él y sólo por su vida; y que la relación que el ex-gobernador escribió al rey justificando el haberse autoencomendado -se refiere a la carta citada en nota 42- era falsa, "sinistra", ya que él no hizo ningún descubrimiento y los repartimientos que tomó para sí ya estaban pacíficos.

En el pleito subsiguiente que esta petición de incorporación originó entre los Oficiales Reales y doña Inés Álvarez, el gobernador Gonzalo Ronquillo falló a favor de la viuda, con la condición de que, por su estado y edad, pusiese una persona que, nombrada por él mismo y con un salario de 1500 pesos sacados de las encomiendas, se ocupase de ellas y acudiese al servicio real⁽⁴⁹⁾. Sólo un días más tarde, el gobernador nombraba a su primo, el maestre de campo Diego Ronquillo, escudero de doña Inés.

Ante el fallo contrario a sus intereses, las acciones de los ministros se orientan en una doble dirección: por una parte, a solicitar al rey que ordenase la incorporación⁽⁵⁰⁾; por otra, apelar a la Audiencia de Nueva España. Allí, el fiscal Eugenio de Salazar pidió que, a la muerte de su actual propietaria, las encomiendas volvieran a la Corona, usando de nuevo el argumento jurídico de que, por la cédula de 1577, no se habían desincorporado sino sólo puesto por vía de *interin* y por tiempo limitado en cabeza de Labezaris. La Audiencia, aún pendiente del fallo de la apelación del pleito entre la viuda del ex-gobernador y los Oficiales Reales de Filipinas, dictó una provisión real por la que ordenaba que, en caso de que doña Inés falleciese antes de concluir el litigio o "después de acabado, sin orden particular", se incorporasen sus encomiendas al patrimonio real⁽⁵¹⁾.

Si hacemos caso a dos anónimas relaciones, otras cosas estaban sucediendo en Filipinas en torno a este pleito⁽⁵²⁾. Ambas nos contestan varias interrogantes surgidas ante las actitudes de los gobernadores Sande y Ronquillo. ¿Por qué el primero no usó del "obedezco pero no cumplo" cuando los Oficiales Reales contradijeron la cédula de 1577 que devolvía las encomiendas a Labezaris?. ¿Por qué, muerto éste, Ronquillo no las incorporó tal como se lo pidieron aquellos ministros?. ¿Defendía sólo los intereses de la viuda u otros inconfesables?. Asimismo, en estas anónimas relaciones se nota un cambio de actitud hacia Guido de Labezaris. Si bien hasta entonces los funcionarios reales habían mostrado respeto hacia el ex-gobernador⁽⁵³⁾, ahora se le ataca sin misericordia; así, entre las causas por las que Legazpi no le dio ningún repartimiento, uno de los documentos confiesa que "así por ser Oficial de Su Magestad como porque el Ade-

lantado las repartió entre los que habían servido"⁽⁵⁴⁾. El cambio de opinión con respecto a 1578 es evidente, pues ahora Labezaris resulta "indigno" de recibir mercedes. Y si antes la razón de haber conseguido la cédula de 1577 se basaba en la desinformación que el rey tenía "de la importancia y utilidad de dicha encomienda"⁽⁵⁵⁾, ahora se fundamenta en la "sinistra relación" que Guido hizo al monarca -se refiere a la carta citada en nota 42-, "porque cuando él entró a gobernar ya estaba pacífica la Pampanga, Ylocos y Butuán, como lo están hasta ahora..."⁽⁵⁶⁾.

Volviendo a los interrogantes planteados anteriormente, el porqué Sande no contradijo, como lo demandaban los Oficiales Reales, sino que obedeció la cédula de 1577 que le presentó Labezaris en la que le ordenaba se le devolviesen los repartimientos, su porqué, repito, nos lo descubren ambas anónimas relaciones. Según éstas, el gobernador, que no desconocía que la cédula que le presentaba su antecesor había sido ganada con mentiras, no la suspendió "temiéndose de Sancho López de Agurto, secretario de la Audiencia de México y émulo suyo y deudo de la mujer de Guido"⁽⁵⁷⁾, que, claro está, favorecería a éste desde allí en una época en que Filipinas dependía de la Audiencia novo-hispana.

Así pues, y como ya sabemos, Labezaris gozó de sus encomiendas⁽⁵⁸⁾, aunque no se le devolvieron las cantidades que entraron en la Caja Real durante el tiempo que fueron administradas por los Oficiales Reales, o sea, desde el auto de Sande de 26 de septiembre de 1575 a la real cédula de San Martín de la Vega de 29 de abril de 1577⁽⁵⁹⁾.

En cuanto al segundo interrogante, el porqué el nuevo gobernador Gonzalo Ronquillo no incorporó las encomiendas a la muerte de Labezaris, las anónimas relaciones nos aclaran sus razones. En efecto, y como también ya sabemos, al morir su propietario sin hijos aquéllas recayeron en su viuda, doña Inés Álvarez de Gibrleón. Sin embargo, basándose en que la cédula de 1577 daba las encomiendas a Labezaris no por ley de sucesión sino en el ínterin que se veía su residencia, los Oficiales Reales pidieron a Ronquillo que las incorporase a la Corona. Pero con lo que no contaban ellos y nos exponen estos documentos es con que el gobernador tenía otros planes con respecto a los repartimientos: ligarlos a su círculo familiar. Así, hizo saber a doña Inés que si se casaba con su primo Diego Ronquillo se los concedería, pero que, en caso contrario, los incorporaría a la Corona. La pobre viuda, de "88 ó 90 años", se negó al trato. Ante tal negativa y la evidencia de que si las encomiendas se incorporaban no podría aprovecharse de sus beneficios, el gobernador dictó el 2 de diciembre de 1580 un auto en el que adjudicó los pueblos a la viuda, pero cargando sobre ellos una pensión de 1500 pesos a favor de un escudero que se ocupase de su administración. Curiosamente, fue elegido para dicho quehacer el citado Diego Ronquillo, "por yrse ynsinuando en la hacienda."⁽⁶⁰⁾

Ya hemos visto que de este auto apelaron los Oficiales Reales tanto al rey como a la Audiencia de México y cuál fue el fallo de ésta. Los acontecimientos que sucedieron entre la fecha del auto de Ronquillo -2 de diciembre de 1580- y la de la provisión real de la Audiencia novohispana -4 de febrero de 1583- nos vienen relatados en las dos relaciones anónimas ya citadas. En síntesis, fueron los siguientes.

Ante el cariz ilegal que estaba tomando el asunto, el gobernador mandó que dicho

auto no se notificase a los Oficiales Reales para que no pudiesen apelar, de manera que el proceso quedó en este estado "asta el día de oy". En este "día de oy", que no se precisa, se envió al Consejo de Indias "y no a la Real Audiencia por estar de por medio el dicho secretario Sancho López, deudo de la dicha Ynés Álvarez"⁽⁶¹⁾. No sabemos qué impresión causó esta relación en Madrid, ya que nos faltan testimonios de ello. Mas de lo que sí estamos seguros es que tal impresión debió ser mayor aún si los consejeros llegaron a leer la continuación.

El caso es que a doña Inés Álvarez le ofrecieron que dejase la encomienda de Ilocos para dársela a don Antonio Jofre, hijastro del gobernador y a la sazón tesorero de Hacienda, con la condición de que éste casaría con una deuda de la viuda. Parece ser que de alcahuete actuó Miguel de Loarca y que por ello, y porque se ofreció a persuadir a doña Inés a que se casase con Diego Ronquillo, recibió la encomienda de Butuán. Mas aunque la viuda de Labezaris cedió a hacer dejación de las encomiendas de Ilocos y Butuán, se negó a lo de contraer matrimonio con el primo del gobernador⁽⁶²⁾.

Mencionamos anteriormente que los réditos de las encomiendas del tiempo que se cobraron por los Oficiales Reales, unos doce mil pesos, nunca se pagaron a Labezaris. Pues bien, el secretario Sancho López pidió a doña Inés que donara aquel derecho a una sobrina suya, ya que él sí los cobraría. Hecha la cesión, se presentó una reclamación en la Audiencia de México contra la Caja de Filipinas; pero como estaba tan pobre, se proveyó que dicha deuda se pagara en la de México.

No acaba aquí este vergonzoso episodio, sino que Sancho López y su cuñado, el también secretario Osorio, urdieron otra estratagema: que doña Inés Álvarez casara con el capitán Juan López de Rivera, quien estaba en México, con la condición de que, mientras ella viviera, él no pudiese gozar los tributos sino que enviase cierta parte de ellos a los dichos secretarios, quedándose doña Inés con el resto; y una vez fallecida ésta, Juan López debería entregarles la mitad de los tributos de los dos primeros años y, después, la tercera parte. Según nuestro anónimo informante, parece ser que, firmadas las escrituras de este maquiavélico asunto, se envió un poder a Filipinas para casarse Juan López con la viuda. Con el fin de coaccionarla, pues se temía que no aceptase, Sancho López obtuvo una provisión de la Audiencia para que el pleito que ella tuvo con los Oficiales Reales fuese enviado a México, dándole a entender que si no se casaba con el capitán se le despojaría de sus pueblos.

Poco tiempo después, no sabemos si a causa de los disgustos, moría doña Inés Álvarez. Los Oficiales Reales -continúa la relación- pidieron al gobernador interino, Diego Ronquillo, que incorporase las encomiendas, pero, evidentemente, no hizo caso.

Para finalizar, la anónima relación nos cuenta que fue presentada al gobernador una provisión de la Audiencia de México⁽⁶³⁾ en la que se le ordenaba que no encomendase los pueblos que habían pertenecido a la viuda de Labezaris. Pero, se lamenta nuestro informador, "todo esto no ha aprovechado para alcanzar justicia"⁽⁶⁴⁾. Estas enigmáticas palabras se referirían sin duda alguna al hecho de que, de las tres encomiendas en litigio, dos habían ido a parar a manos de particulares debido a las mañas del gobernador Gonzalo Ronquillo: la de Purao y Tagurín a Antonio Jofre y la de Butuán a Miguel de Loarca. Así pues, sólo la de Bitis y Lubao se incorporó al erario real.

GOBERNADORES DE FILIPINAS CITADOS EN EL TEXTO

Miguel López de Legazpi, 1565-1572.

Guido de Labezaris, 1572-1575. (interino)

Francisco de Sande, 1575-1580.

Gonzalo Ronquillo de Peñalosa, 1580-1583.

Diego Ronquillo, 1583-1584. (interino)

NOTAS

- ⁽¹⁾ Prólogo a la edición de *Sucesos de las Islas Filipinas*, de Antonio de Morga (México, 1609). Madrid: Polifemo, 1997. De forma general se puede definir la corrupción como transgresión de preceptos legales y normativos con fines propios o de grupo. Una definición más restringida es interpretarla como un fraude en los fondos públicos por parte de aquéllos que deben velar precisamente por ellos, o sea, los funcionarios del imperio.
- ⁽²⁾ PIETSCHMANN, Horst. "Burocracia y corrupción en la Hispanoamérica colonial. Una aproximación tentativa". *Nova Americana* 5 (Torino, 1982): 11-37. Se ha publicado también en: Félix Becker y otros. *América Latina en las letras y ciencias sociales alemanas*. Caracas: Monte Ávila editores, 1988; pp. 69-103; como capítulo en idem, *El Estado y su evolución al principio de la colonización española en América*. México: FCE, 1989, pp. 163-182. Y en *Memorias de la Academia Mexicana de la Historia XXXVI* (México, 1993): 5-38. Posteriormente, Pietschmann ha vuelto sobre el tema en "Corrupción en las Indias españolas: revisión de un debate en la historiografía sobre Hispanoamérica colonial". En: *Instituciones y corrupción en la Historia*. Valladolid: Universidad de Valladolid, Instituto Universitario de Historia "Simancas", 1998; pp. 33-52.
- ⁽³⁾ Para el autor citado, lo que se creó fue un marco teórico ideal, presentado al conjunto de la sociedad como una aspiración a largo plazo.
- ⁽⁴⁾ FONTANA, Josep. "Las reglas y el juego. Algunas reflexiones históricas sobre la corrupción". En: *El fraude fiscal en la Historia de España*. Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales, 1994. (Monografías de la Revista Hacienda Pública Española; 1/1994); pp. 25-29.
- ⁽⁵⁾ Carta real a Miguel de Legazpi. Escorial, 16 de noviembre de 1568. Archivo General de Indias, Sevilla (en adelante AGI). Filipinas 339, I, 1. Para los despachos reales, vid. Patricio HIDALGO NUCHERA, *Encomienda, tributo y trabajo en Filipinas (1570-1608)*. Madrid: Polifemo y Universidad Autónoma de Madrid, 1995, pp. 29-40.
- ⁽⁶⁾ Auto y declaración de los pueblos que se ha puesto en cabeza de Su Magestad. Villa del Santísimo Nombre de Jesús, 16 de enero de 1571. El documento es un traslado hecho en Manila el 9 de enero de 1574. AGI. Filipinas 29, ramo 1º.
- ⁽⁷⁾ Vid. la Relación de encomiendas despachadas por los gobernadores Miguel López de Legazpi, Guido de Labezaris y Francisco de Sande, realizada en Manila el 2 de junio de 1576. AGI. Patronato 24, ramo 19º. Transcripción parcial en la edición anotada que Pablo Pastells hizo de la obra del jesuita Francisco COLÍN, *Labor evangélica, ministerios apostólicos de los obreros de la Compañía de Jesús, fundación y progresos de su provincia en las Islas Filipinas...* (Madrid: 1663). Barcelona: Imprenta y Litografía de Henrich y Compañía, 1900-1902. 3 v; vid. vol. I, p. 157, nota 1ª. Cuadro sinóptico de las despachadas por Legazpi en el Catálogo de los documentos relativos a las *Islas Filipinas existentes en el Archivo de Indias de Sevilla*. Precedido de una erudita Historia General de Filipinas desde los primeros descubrimientos portugueses y castellanos en Oriente, Occidente y Mediodía hasta la muerte de Legaspi, por el padre Pablo Pastells, S.J. Barcelona: Compañía General de Tabacos de Filipinas, 1925-1934. 9 v. en 10 tomos; vid. vol II, pp. XVI-XVII.
- ⁽⁸⁾ Testimonio de cómo los Oficiales Reales significaron al gobernador (Sande) las necesidades de la Real Caja. Manila, 5 de febrero de 1579. El documento es un traslado de 22 de mayo del mismo año. AGI. Filipinas 29, ramo 2º.

- ⁽⁹⁾ Carta del factor Juan Bautista Román a Su Magestad. Manila, 22 de junio de 1582. AGI. Filipinas 27, ramo 1º.
- ⁽¹⁰⁾ *Ibidem*.
- ⁽¹¹⁾ Carta de Sande a Su Magestad. Manila, 7 de junio de 1576. AGI. Filipinas 6, ramo 1º. Transcrita en RETANA Y GAMBOA, Wenceslao E. *Archivo del Bibliófilo Filipino: recopilación de documentos científicos, literarios y políticos y estudios bibliográficos*. Madrid: M. Minuesa de los Ríos, 1895-1905. 5 v; vid. vol. II, aunque con fecha de 7 de julio; especialmente capítulo 106.
- ⁽¹²⁾ Carta del factor Román citada en nota 9.
- ⁽¹³⁾ *Ibidem*.
- ⁽¹⁴⁾ Testimonio... citado en nota 8. La disposición que dichos ministros citan es la 145 en la transcripción que Antonio Muro Orejón hace de las "Ordenanzas de Descubrimientos, Nuevas Poblaciones y Pacificaciones. Bosque de Segovia, a 13 de julio de 1573". Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1967.
- ⁽¹⁵⁾ *Ibidem*.
- ⁽¹⁶⁾ Carta de los Oficiales Reales a Su Magestad. Manila, 10 de junio de 1579. AGI. Filipinas 29, ramo 3º.
- ⁽¹⁷⁾ *Ibidem*.
- ⁽¹⁸⁾ Carta de los Oficiales Reales a Su Magestad. Manila, 22 de junio de 1580. AGI. Filipinas 29, ramo 3º. Vid. asimismo, COLÍN, *Labor evangélica...*, edición de Pastells, vol. I, p. 168 y 169 nota 1ª; y Antonio de MORGA, *Sucesos de las Islas Filipinas* (México, 1609), edición de Retana en Madrid, 1909, pp. 23 y 397 nota 41ª.
- ⁽¹⁹⁾ Carta de los Oficiales Reales a Su Magestad. Manila, 20 de julio de 1580. AGI. Filipinas 29, ramo 3º.
- ⁽²⁰⁾ Carta de los Oficiales Reales a Su Magestad. Manila, 20 de mayo de 1582. AGI. Filipinas 29, ramo 3º. Vid. la Real cédula de San Lorenzo, 14 de junio de 1583 (AGI. Filipinas 339, I -2ª parte-, 95 v.) dirigida a la Audiencia para que informase de esta última petición. Un año después, Felipe II ordenará la incorporación a la Corona de los pueblos que vacasen para el pago de los salarios de la primera Audiencia hasta la cantidad de 12000 pesos. RC. Aranjuez, 10 mayo 1583. AGI. Filipinas 339, I -2ª parte-, 36 v.
- ⁽²¹⁾ Carta de los Oficiales Reales a Su Magestad. Manila, 10 de junio de 1579. AGI. Filipinas 29, ramo 3º.
- ⁽²²⁾ Cartas de los Oficiales Reales a Su Magestad. Manila, 20 de julio de 1580 y 20 de mayo de 1582. Ambas en AGI. Filipinas 20, ramo 3º.
- ⁽²³⁾ Carta de los Oficiales Reales a Su Magestad. Manila, 20 de julio de 1580. AGI. Filipinas 29, ramo 3º.
- ⁽²⁴⁾ Carta de los Oficiales Reales a Su Magestad. Manila, 20 de mayo de 1582. AGI. Filipinas 29, ramo 3º.
- ⁽²⁵⁾ En desagravio al gobernador Gonzalo Ronquillo, que tantas críticas recibió de los Oficiales Reales, podemos esgrimir la defensa que del patrimonio real llevó a cabo en el pleito de la encomienda de Baratao. Ésta había vacado al morir sin herederos don Rodrigo de Frías, su último poseedor. En el entretanto que el gobernador Sande la reancomendaba o la incorporaba a la Corona, fue cobrada por la Hacienda. En este tiempo llegó a las Islas Gonzalo Ronquillo, sucediendo que, a la sazón que tomaba posesión de su cargo de nuevo gobernador, su antecesor Sande la concedió a su hermano Bernardino. Como era natural, al no ser ya la máxi-

ma autoridad, el título de la concesión sólo estaba firmado por Sande y no, como era preceptivo, por el escribano de la gobernación ni inserto en sus libros. Además de esta negligencia, tres causas imposibilitaban legalmente tal concesión: primera, que siendo Sande gobernador, no podía encomendarla a su hermano conforme a ley; segunda, que Bernardino gozaba de 3000 tributarios en la provincia de la Laguna de Bay concedidos por su hermano y, legalmente, no podía tener encomiendas en diferentes provincias; y tercera, su carencia de servicios, ya que cuando le dio la primera sólo tenía 14 ó 15 años. Ni qué decir tiene que cuando Ronquillo de Peñalosa tuvo conocimiento del fraude rompió el título de la encomienda. Incorporada a la Corona, Bernardino acudió a la Audiencia de México, adonde su hermano Francisco volvió como oidor; allí no le fue difícil conseguir una "provisión ejecutoria" para que se le devolviera. (Real Provisión dada en la ciudad de México el 1 de Marzo de 1582 en el pleito entre el fiscal con Bernardino de Sande. Incluida en el pleito 508 del fiscal y el general Juan Ronquillo del Castillo con el mariscal Gabriel de Ribera y su hijo Francisco de Ribera y Guzmán. AGI. Escribanía de Cámara 403-B). Por su parte, los Oficiales Reales de Filipinas suplicaron ante el gobernador la citada disposición, con lo que la causa volvió a México. De nuevo, los tejemanejes del ex-gobernador lograron que se sobrecartase la sentencia en favor de su hermano, amenazando con graves penas su incumplimiento. La desazón de los funcionarios de Hacienda ante lo que consideraban un atropello del patrimonio real se trasluce de los últimos párrafos de su relación:

"Y los Oficiales no se atreven a seguir este negocio en propiedad conforme a la ley de Malinas por estar el doctor Sande tan poderoso y en su plaza y ser grandísimo amigo del virrey". (Relación de veinte mil y tantos pesos de oro que están usurpados a la Real Corona en estas Islas Filipinas, y la encomienda de Baratao, que es de Su Magestad en la provincia de Ylocos. Sff., pero de hacia 1580. AGI. Filipinas 29, ramo 1º).

⁽²⁶⁾ Carta del fiscal Ayala a Su Magestad. Manila, 15 de julio de 1589. AGI. Filipinas 18-A, ramo 4º. La actitud del gobernador se enmarca en el ataque que sufrió la primera Audiencia por parte de todos los estamentos de las Islas, ya que era un obstáculo para sus oscuros intereses. El desenlace les fue favorable, pues a mediados de 1590 la Audiencia fue suprimida. Fue reestablecida en 1598.

⁽²⁷⁾ Carta del tesorero Hernando de Avila a Su Magestad. Manila, 15 de junio de 1595. AGI. Filipinas 29, ramo 4º.

⁽²⁸⁾ Decreto al margen de la carta anterior.

⁽²⁹⁾ Carta de los Oficiales Reales a Su Magestad. Manila, 29 de junio de 1597. AGI. Filipinas 29, ramo 5º.

⁽³⁰⁾ Carta de Francisco Tello a Su Magestad. Manila, 12 de julio de 1599. AGI. Filipinas 18-B, ramo 7º.

⁽³¹⁾ Ibidem.

⁽³²⁾ Carta de los Oficiales Reales a Su Magestad. Manila, 15 de julio de 1604. AGI. Filipinas 29, ramo 5º.

⁽³³⁾ Carta de los Oficiales Reales a Su Magestad. Manila, 29 de junio de 1597. AGI. Filipinas 29, ramo 5º.

⁽³⁴⁾ Carta de Andrés de Mirandaola a Su Magestad. México, 1 de abril de 1574. AGI. México 69, ramo 1º. Transcrita en RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Isacio (O.S.A.), *Historia de la Provincia Agustinitana del Santísimo Nombre de Jesús de Filipinas*. Manila, Valladolid, Zamora: s.n., «1965-1993», 22 v. (en curso de publicación); vid. vol. XIV, Doc. 55, p. 173.

⁽³⁵⁾ Relación de los tributos y cobranzas que en nombre de la Audiencia Real de Vuestra Mage-

tad se han cobrado en el tiempo del gobernador Guido de Labezaris desde XXI de agosto de 1572 asta XXVII días del mes de junio de 1573, de los cuales no ay razón ni parece averse metido en la caja de las tres llaves de Vuestra Magestad cosa alguna dello, ni en las quantas aparte de lo que es a cargo del tesorero y contador parecen, los cuales se cobraron estando yo ausente. Andrés de Mirandaola. México, 1 de abril de 1574. AGI. México 69, ramo 1º -acompañando a la carta citada en nota anterior- y en Patronato 24, ramo 26º.

⁽³⁶⁾ Relación de los pueblos que en cabeza de Vuestra Magestad puso el adelantado Miguel López de Legazpi y el aprovechamiento que dellos se puede sacar y lo que en ellos se ofrece. Andrés de Mirandaola. México, 1 de abril de 1574. AGI. México 69, ramo 1º -acompañando a la carta citada en nota 34- y en Patronato 24, ramo 26º.

⁽³⁷⁾ Ibidem. Otra acusación de Mirandaola -que, por cierto, era sobrino del padre Urdaneta- contra Labezaris consta del testimonio que él mismo sacó, firmado por el contador Andrés Cuchela, de lo que aquél había recibido de la Real Hacienda en el tiempo que fue tesorero y después gobernador. De fecha 27 de mayo de 1573, no hemos podido consultarlo y la noticia sobre él está recogida en COLÍN, *Labor evangélica...*, edición de Pastells, vol. I, p. 134, nota 2ª. A estas acusaciones atribuye Pastells el relevo de Labezaris por Sande, con quien volvió Mirandaola a Filipinas repuesto en su antiguo cargo de Factor.

⁽³⁸⁾ Relación del pleito entre doña Ynés Álvarez de Gibrleón, viuda de Guido de Labezaris, y los Oficiales Reales. AGI. Escribanía de Cámara 403-A.

⁽³⁹⁾ Sus títulos tienen las siguientes fechas: la de Bitis y Lubao, en la Pampanga, y la del río de Butuán, en Mindanao, junto a los pueblos de Danao, Cotcot, Diguata y Cascasan, en Cebú, el día 5 de septiembre de 1572; la de Purao, el 23 de julio de 1573; y la de Tagurin, el 14 de abril de 1574. Todos los títulos de concesión se encuentran en la "Relación del pleito..." citado en nota anterior.

Con respecto a la encomienda de Bitis y Lubao, y según noticias del virrey de Nueva España don Martín Enríquez, ya antes Legazpi había pretendido que el rey se la concediese. Vid. la Carta del virrey de Nueva España a Su Magestad. México, 5 de diciembre de 1573. Archivo Histórico Nacional, Madrid. Doc. Ind. Secc. Div. nº. 219. Transcrita en Rodríguez, *Historia...*, vol. XIV, Doc. 52, p. 160.

Por otra parte, Labezaris repartió encomiendas entre los propios Oficiales Reales; pero su sucesor en el gobierno, Francisco de Sande, se las quitó a todos. Vid. al respecto, Patricio Hidalgo Nuchera, *Encomienda, tributo y trabajo en Filipinas (1570-1608)*, Madrid: Polifemo y Universidad Autónoma de Madrid, 1995, pp. 82-89.

⁽⁴⁰⁾ El auto en la "Relación del pleito...". Vid. la Carta de Sande a Su Magestad. Manila, 7 de junio de 1576. AGI. Filipinas 6, ramo 1º. Transcrita en RETANA, *Archivo del Bibliófilo Filipino...*, vol. II, con fecha de 7 de julio; vid. especialmente sus capítulos 92 y 103. En este último da a entender que le había parecido que el rey había concedido la encomienda de Bitis y Lubao al hijo de Miguel de Legazpi; y que si era cierto, suplicaría de ello debido a la importancia de este repartimiento. Proponía como solución, si sus noticias eran ciertas, que se le trocase por otro en Nueva España.

⁽⁴¹⁾ Vid. capítulo 61 de las "Ordenanzas de Descubrimientos, Nuevas Poblaciones y Pacificaciones. Bosque de Segovia, 13 de julio de 1573". Edición de Antonio Muro Orejón. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1967.

⁽⁴²⁾ Carta de Labezaris a Su Magestad. Manila, 8 de junio de 1576. AGI. Filipinas 6, ramo 1º. La información de esta carta será tildada más adelante por los Oficiales Reales de "sinistra relación".

⁽⁴³⁾ Real Cédula San Martín de la Vega, 29 de abril de 1577. AGI. Filipinas 339, I, 83 v. En la

"Relación del pleito..."; de la misma fecha, otra dirigida a Labezaris otorgándole los repartimientos. Por último, sobrecédula dirigida a Gonzalo Ronquillo con fecha de El Pardo, 2 de diciembre de 1578, en AGI. Filipinas 339, I, 142 y en la "Relación del pleito...".

⁴⁴⁴ La presentación de la cédula por Labezaris y su cumplimiento por Sande tuvieron lugar el 17 de julio de 1578. Vid. el Testimonio de la contradicción que hicieron los Oficiales Reales de Filipinas al cumplimiento de la Real Cédula en que se hace merced de ciertas encomiendas a Guido de Labezaris. AGI. Filipinas 29, ramo 2º y, duplicado, Filipinas 34, ramo 1º.

⁴⁴⁵ El auto tiene fecha de 21 de julio de 1578. En el "Testimonio de la contradicción..." citado en nota anterior.

⁴⁴⁶ La petición de la contradicción de la cédula y el nuevo auto del gobernador, de fecha 24 de julio de 1578, en el "Testimonio de la contradicción..." citado en nota 44.

⁴⁴⁷ Carta de los Oficiales Reales a Su Magestad. Manila, 28 de julio de 1578. AGI. Filipinas 29, ramo 2º.

⁴⁴⁸ Petición de los Oficiales Reales de 10 de noviembre de 1580, inserta en la "Relación del pleito...".

⁴⁴⁹ Auto del gobernador don Gonzalo Ronquillo. Manila, 2 de diciembre de 1580. En "Relación del pleito...".

⁴⁵⁰ Cartas de los Oficiales Reales a Su Magestad. Manila, 20 de julio de 1580 y 20 de mayo de 1582. Ambas en AGI. Filipinas 29, ramo 3º.

⁴⁵¹ Provisión Real de la Audiencia de México a don Gonzalo Ronquillo. México, 4 de febrero de 1583. En la "Relación del pleito..."

⁴⁵² Relación de los repartimientos de Bitis y Lubao en la provincia de la Pampanga y Purao y Tagurín en la de Ylocos y el río de Bután en la ysla de Vindanao que están usurpados a la Corona en estas yslas Philippinas. S/f. AGI. Filipinas 34, ramo 2º (en adelante, relación 1ª). Relación del modo con que están usurpados a la Corona Real de Su Magestad los repartimientos de indios de Bitis y Lubao, Purao, Tagurín y Butuán. S/f. AGI. Patronato 23, ramo 8º (en adelante, relación 2ª).

Ambas relaciones son similares, si bien la primera es más extensa y parece verse en ellas la mano de los Oficiales Reales. Y aunque son parciales, nos muestran la venalidad de los gobernadores y la anteposición de sus propios intereses a los de la Corona.

⁴⁵³ "... es digno de la merced de Su Magestad..." puede leerse en el "Testimonio de la contradicción...", de fecha 24 de julio de 1578, citado en nota 44.

⁴⁵⁴ Vid. nota 52, relación 2ª.

⁴⁵⁵ Testimonio de la contradicción... citado en nota 44.

⁴⁵⁶ Vid. nota 52, relación 2ª.

⁴⁵⁷ Vid. nota 52, relación 1ª.

⁴⁵⁸ Se le devolvieron todas excepto la de Butuán, ya que ésta no venía expresada en la cédula de 1577; pero más tarde se le restituyó también. Vid. nota 52, relación 2ª.

⁴⁵⁹ Vid. nota 52, relación 1ª.

⁴⁶⁰ Vid. nota 52, relación 1ª. En la 2ª se lee: "por irle insinuando en casa".

⁴⁶¹ Vid. nota 52, relación 1ª. Mostramos extrañeza ante esto, ya que los Oficiales Reales conocieron el auto y apelaron a México. Vid. notas 50 y 51.

⁴⁶² Llegados a este punto, el autor de la relación 2ª puso punto final, ya que "si se hubieran de decir todas las marañas y fraudes que en ello ha habido sería muy largo". No fue de tal opi-

nión el autor de la 1ª, seguramente más decidido a hacer saber en la Corte la vergonzosa actuación del gobernador de Filipinas.

⁽⁶³⁾ Debe referirse a la Provisión Real de la Audiencia de México a don Gonzalo Ronquillo. México, 4 de febrero de 1583, ya citada en nota 51.

⁽⁶⁴⁾ Vid. nota 52, relación 1ª.